

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

Magistrada Ponente.

Apelación – Auto	
DEMANDANTE	ALFREDO ANTONIO CATAÑO ORTEGA y OLGA DE JESÚS MORA MORA
DEMANDADO	AFP PORVENIR S.A.
RADICADO	05001-31-05-013-2018-00424-02
TEMAS	Graduación de las costas
DECISIÓN	Confirma valor fijado

Medellín, treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por los señores **ALFREDO ANTONIO CATAÑO ORTEGA** y **OLGA DE JESÚS MORA MORA** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de

deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 003**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

A N T E C E D E N T E S

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante, contra el auto proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día 30 de septiembre de 2022, el cual impartió aprobación a la liquidación secretarial de costas procesales impuestas en la respectiva instancia.

Al respecto, debe recordarse que los señores ALFREDO ANTONIO CATAÑO ORTEGA y OLGA DE JESÚS MORA MORA solicitaron judicialmente se declare que les asiste derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en calidad de padres del afiliado fallecido NELSON JEFFERSON CATAÑO MORA, en consecuencia, SE CONDENE a la AFP PORVENIR S.A., al reconocimiento y pago de esta prestación económica, en forma retroactiva a partir del 1° de abril de 2016, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio de estos, la indexación de las condenas, lo que ultra y extra petita resulte acreditado en la litis, y las costas procesales.

En sentencia del 17 de octubre de 2019, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a la AFP PORVENIR S.A., a pagar a los señores OLGA DE JESÚS MORA MORA y ALFREDO ANTONIO CATAÑO ORTEGA una pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento del afiliado NELSON JEFFERSON CATAÑO MORA, a partir del 1° de abril de 2016, en un porcentaje del 50% para cada uno de ellos.

A título de retroactivo pensional, CONDENÓ a la afp demandada al pago de \$17.047.025 a favor de cada uno de los demandantes, que comprende las mesadas pensionales causadas entre el 1° de abril de 2016 y el 30 de septiembre de 2019, y a partir del 1° de octubre de 2019, ordenó a la AFP PORVENIR S.A., a continuar pagando a los demandantes una pensión mínima de sobrevivientes en partes iguales, sobre 13 mesadas anuales, sin perjuicio del acrecimiento que pueda operar a futuro.

Finalmente, ordenó la indexación del retroactivo pensional, y condenó en costas procesales de primera instancia a la AFP PORVENIR S.A., y a favor de los demandantes, fijando como agencias en derecho la suma de \$2.300.000.

La sentencia de primera instancia fue conocida por este Tribunal de Distrito Judicial en apelación presentada por ambas partes, habiéndose proferido sentencia de segunda instancia el día 9 de abril de 2021, mediante la cual se confirmó la sentencia objeto de apelación, absteniéndose la Sala de imponer costas procesales en la segunda instancia.

La parte demandada presentó recurso extraordinario de casación ante la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, y dicha corporación judicial a través de su Sala de Descongestión N° 3, profirió sentencia en la fecha 17 de agosto de 2022 (SL2896-2022), en la que decidió NO CASAR lo resuelto por este Tribunal de Distrito Judicial, y ante la improsperidad del recurso extraordinario, impuso costas procesales a cargo de la AFP PORVENIR S.A., y a favor de los aquí demandantes, fijando como agencias en derecho la suma de \$9.400.000.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE ALZADA

Una vez ejecutoriado el auto de cúmplase lo resuelto por el superior (SL2896-2022), fue devuelto el expediente al juzgado de origen, la *A Quo* mediante auto del 30 de septiembre de 2022, ordenó que a través de trámite secretarial se liquidaran las costas procesales, por las siguientes sumas:

A CARGO DE PORVENIR S.A. Y EN FAVOR DE ALFREDO ANTONIO CATAÑO ORTEGA

Agencias en Derecho en 1ª Instancia	\$1.150.000
Agencias en Derecho en 2ª Instancia.....	\$0
Gastos	\$0
Casación	\$4.700.000
TOTAL.....	\$ 5.850.000

Son: **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$5.850.000)**

A CARGO DE PORVENIR S.A. Y EN FAVOR DE OLGA DE JESUS MORA MORA

Agencias en Derecho en 1ª Instancia	\$1.150.000
Agencias en Derecho en 2ª Instancia.....	\$0
Gastos	\$0
Casación	\$4.700.000
TOTAL.....	\$ 5.850.000

Son: **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$5.850.000)**

En providencia de la misma fecha, se le impartió aprobación a dicha liquidación por parte de la *A Quo*.

La apoderada judicial de la parte demandante recurrió en reposición y en subsidio apelación el valor liquidado por concepto de costas procesales.

La jueza de primer grado mediante proveído del 21 de octubre de 2022, negó el recurso de reposición, argumentando que la fijación de las agencias en primera instancia a cargo de la afp accionada se encontraba acorde a las tarifas y criterios establecidos en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y

ordenó la remisión del expediente digital a este Tribunal de Distrito Judicial, para surtir la alzada.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La apoderada judicial de los demandante, refiere no compartir la liquidación de agencias en derecho en primera instancia, al considerarla insuficientes, toda vez que no se compadecen con los criterios fijados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 1887 de 2003 (sic), vigente al momento de interponer la demanda en cuestión, según el cual las tarifas para realizar la liquidación de costas en este tipo de procesos de menor cuantía debe ser un porcentaje que va del 4% al 10% de lo pedido.

Y que por ello el juzgado estaba en la posibilidad de condenar hasta por el valor de \$3.481.439, teniendo en cuenta para ello factores como el tipo de proceso adelantado, la gestión realizada por el apoderado y el tiempo que se tardó en impartir justicia; aduce que la a quo solo tuvo en cuenta para la fijación de este valor, el retroactivo causado hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, siendo necesario que el mismo sea actualizado hasta la fecha actual.

A juicio de la recurrente el monto fijado, si bien se encuentra dentro de los valores señalados por la norma, no se compadece con la gestión desplegada por la suscrita ni la duración del trámite, atención y diligencia al encargo, pues si bien, el asunto no ofrece mayor complejidad, la vocera judicial ejerció su defensa durante 35 meses con diligencia, atendiendo los requerimientos del Despacho, asistiendo a las audiencias y ejerciendo la defensa con completa premura. Anudado a que tampoco puede perderse de vista que, la demandante se vio forzada a contratar mis servicios para iniciar un proceso ordinario y lograr sus pedimentos, luego no es dable pauperizar dichos esfuerzos.

Motivos por los cuales solicita un aumento en las agencias en derecho en primera y segunda instancia como parte integrante de las costas, sean liquidadas sobre \$3.481.439 a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de cada uno de los demandantes.

Alegatos de conclusión

No se presentaron alegatos de conclusión en segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, las costas de un proceso corren a cargo de *“...la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto...”*.

Dicha disposición consagra un criterio objetivo que busca que las costas del proceso sean cubiertas por quien pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez se decida la litis.

Las costas del proceso comprenden, de un lado, los gastos judiciales que haya hecho la parte beneficiada con la condena y que aparezcan comprobados en el expediente y del otro, las agencias en derecho, en las que, para su fijación por el juez *“deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas...”* (Artículo 366, numeral 4º del CGP).

De otro lado, el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, establece en su artículo 2° los criterios a tener en cuenta para la fijación de tales emolumentos:

“ARTÍCULO 2°. Criterios. *Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.*

PARÁGRAFO. *Cuando el asunto objeto del proceso esté relacionado con la violencia de género y dentro de él se hayan acreditado las circunstancias constitutivas de la misma, el funcionario judicial al fijar agencias en derecho deberá realizar una valoración favorable de cargas y costos para las mujeres víctimas de aquella.”*

Seguidamente, en lo que atañe a la tasación de las agencias en aquellos en los PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL, el mencionado acuerdo prescribe:

“ARTÍCULO 5°. Tarifas. *Las tarifas de agencias en derecho son:*

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.

En única instancia.

a. *Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.*

b. *En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.*

En primera instancia.

a. *Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:*

(i) *De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.*

(ii) *De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.*

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de

***cuantía o de pretensiones pecuniarias,
entre 1 y 10 S.M.M.L.V.***

En segunda instancia.

Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”

CASO CONCRETO

Vigencia de las normas reguladoras de la tasación de agencias en derecho en el Sub lite:

En el presente caso resulta aplicable la regulación establecida en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una demanda presentada en el año 2018.

También destaca la Sala que, al tratarse de un proceso ordinario laboral declarativo de doble instancia, y resultar la sentencia de primera instancia desfavorable para los intereses de la AFP PORVENIR S.A., el numeral 1° del artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, establece con absoluta claridad que las agencias en derecho en primera instancia tratándose de asuntos de menor cuantía, podrán ser tasadas por el administrador de justicia en una suma que puede oscilar entre el 4% y el 10% de lo pedido.

Y en el presente caso la condena por AGENCIAS EN DERECHO en la primera instancia fue de \$2.300.000., equivalente a 6.7% del retroactivo reconocido en primera instancia a favor de ambos demandantes (\$34.094.050).

Visto lo anterior, estima la Sala que en el presente asunto este aumento de las agencias en derecho en primera instancia, contrario a lo indicado por la recurrente si se encuentra armonizado con los

criterios del art. 2° del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, esto es, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, pues del porcentaje máximo permitido por la norma (10%) la fijación se hizo en un 6.7% de lo pedido y condenado en primera instancia, es decir, el porcentaje utilizado se encuentra dentro de los topes autorizados por el referido acuerdo, y la discrecionalidad empleada por la funcionaria judicial de primer grado no desconoció los criterios antes señalados.

Pues no le era dable a la juez de primer grado, entrar a liquidar a cuanto ascendían las condenas en abstracto hasta el momento mismo en que se efectuó la liquidación secretarial y concentrada de las costas procesales y agencias en derecho, como lo propone la recurrente, pues esta condena debía ser liquidada en concreto al momento de proferirse la sentencia de primer grado, como efectivamente ocurrió en acatamiento a lo dispuesto en el numeral 2° del art. 365 del Código General del Proceso.

La normativa señalada (vigente para la fecha en que se profirió la sentencia de primer grado), exigía entonces una liquidación en concreto de las agencias en derecho, y dicha liquidación solo podía efectuarse hasta la fecha de la sentencia de primer grado, teniendo en cuenta las mesadas pensionales causadas hasta ese momento, por cuanto las mesadas que se siguieron causando a futuro, eran del todo inciertas, al desconocerse el momento en que operaría la firmeza y ejecutoria de la sentencia de primer grado, no resultando así procedente el aumento que pretende la apoderada judicial de los demandantes en su recurso de alzada, quien refiere que las agencias en derecho debían corresponder a un porcentaje del retroactivo

causado hasta el momento de efectuarse la liquidación concentrada de las costas procesales.

Es por lo anterior, que la actualización de las condenas no será acogida por la Sala, al tornarse improcedente para calcular el valor de las agencias en derecho en la primera instancia, pues este recalcule no está permitido en la normativa citada, y tampoco fue ordenado en las sentencias que desataron los recursos de apelación, y casación.

Finalmente advierte la Sala que no se hará ningún pronunciamiento frente a la fijación de agencias en derecho en la segunda instancia, ya que esta condena es inexistente, al haberse abstenido la Sala de la misma en la sentencia de fecha 9 de abril de 2021, motivos por los cuales se confirmará lo resuelto por la juez de primer grado mediante proveído del 30 de septiembre de 2022.

Sin COSTAS en esta actuación.

D E C I S I Ó N

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**,

R E S U E L V E:

Primero. CONFIRMAR lo resuelto por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante el auto interlocutorio del 30 de septiembre de 2022, que aprobó la liquidación secretarial de costas procesales y agencias en derecho, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin Costas en esta instancia.

Tercero. Se ordena notificar por **ESTADOS** lo resuelto, y devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 014 del
31 de enero de 2023.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>